

La participación política de los españoles: democracia de baja intensidad

En España la participación directa de la población en los asuntos públicos está bajo mínimos. En cambio, la participación indirecta, a través de los procesos electorales, ha sido notable,¹ siendo los partidos políticos los principales protagonistas de la vida pública en connivencia con los grandes grupos de poder económicos y mediáticos. Este texto recoge la información disponible sobre la participación directa de los españoles y analiza cómo se valoran las instituciones políticas de participación indirecta.²

Las Constituciones democráticas plantean como uno de sus principios básicos la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Así, la Constitución española de 1978 afirma que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes” (art. 23); en consecuencia, se reconocen y regulan los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga, así como consultas a través de referéndum o iniciativas legislativas populares a partir de la recogida de medio millón de firmas, además de establecer mecanismos electorales para elegir a los representantes públicos en la administración local, autonómica, estatal y europea. La participación se manifiesta también en el grado de información sobre cuestiones sociales, en el ejercicio activo de la libre expresión y del debate público, y en el grado de confianza o reconocimiento de las instituciones políticas.³

Colectivo Ioé
está formado por
Carlos Pereda,
Walter Actis y
Miguel Ángel de
Prada
(www.colectivoioe.org)

¹ Entre 1977 y 2006, la participación media en las elecciones al Congreso de los Diputados ha sido del 74% y, en el caso de los Parlamentos autonómicos, del 69%. Sin embargo, la participación es sensiblemente menor en las elecciones al Parlamento Europeo, cuya tendencia histórica muestra una curva decreciente, desde un 64% en 1979 hasta situarse por debajo del 50% en junio de 2004. En cuanto al mecanismo del referéndum, se ha utilizado sólo cuatro veces desde 1976 y cada vez con menor participación: 78% el referéndum para la reforma política en 1976; 67% el referéndum para aprobar la Constitución en 1978; 59% el referéndum sobre la OTAN en 1986; y 41% el referéndum para aprobar la Constitución Europea en 2005.

² Se trata de un material informativo, mayoritariamente procedente de encuestas, que podría ser interpretado y contextualizado también a partir de las constricciones operadas por otras instituciones y procesos sociales concretos.

³ Todos estos temas han sido objeto de reflexión y sistematización para la posterior elaboración de un *Barómetro social de España*, a punto de ser publicado por el Centro de Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial) y Traficantes de Sueños. La publicación, preparada por Colectivo Ioé, incluye 11 ámbitos sociales, entre ellos el de la participación ciudadana, algunos de cuyos resultados se adelantan en este artículo.

Formas de participación social directa

Se entiende por participación directa en los asuntos públicos cualquier actividad, intervención o relación que los ciudadanos mantienen con las instancias e instituciones que están más allá de la esfera de la reciprocidad inmediata (parientes y amigos) y del intercambio mercantil (empleo y consumo).⁴ Tales relaciones y formas de intervención directa en la vida pública presuponen la voluntad de participar por parte de los ciudadanos, lo que depende a su vez de cuáles sean sus actitudes y opiniones respecto a las instituciones más amplias de las que forman parte.

Sólo
ejercita su
derecho a
participar
directamente en
asuntos
públicos el
20% de la
población

La participación directa en los asuntos públicos se puede ejercer esporádicamente, por ejemplo acudiendo a una manifestación, o de manera continuada, por ejemplo militando en un partido político. En ambos casos las formas concretas de participación presentan una gran diversidad y complejidad, lo que explica que la información disponible sobre estos asuntos sea heterogénea y difícil de captar con precisión y fiabilidad.

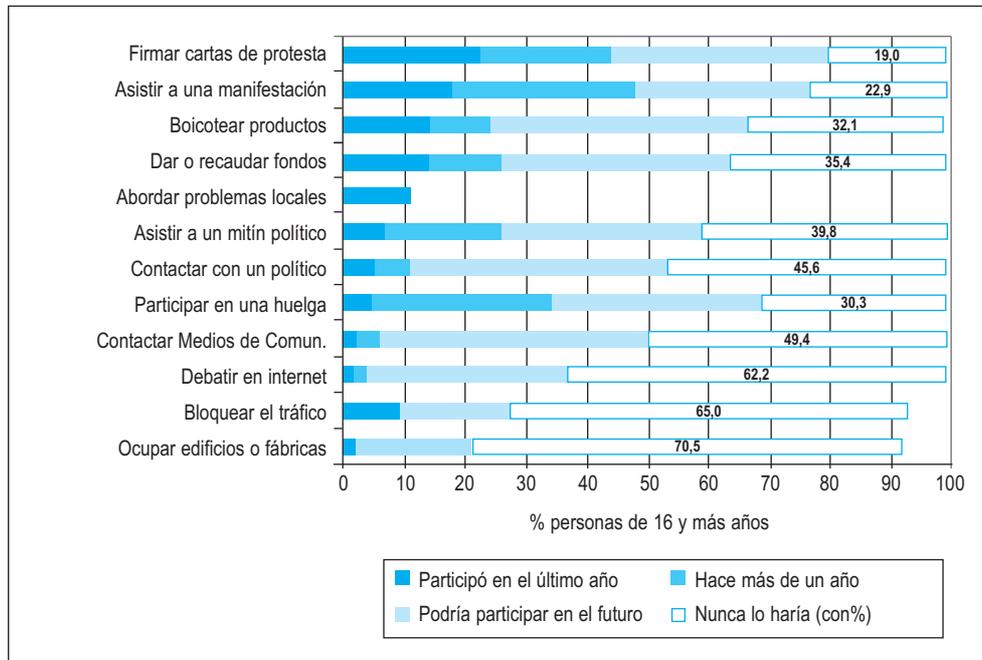
Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de mayo de 2005 permite conocer el grado de participación –real y potencial– de los ciudadanos en diversas formas de intervención (ver gráfico 1). También puede saberse si la persona encuestada había ejercido esa forma de participación directa en el último año o sólo en una época anterior; en caso de no haber participado nunca, se conoce si estaría dispuesta o no a hacerlo en el futuro.

El balance general muestra que la mayoría de la población se manifiesta dispuesta a ejercer su derecho a participar directamente en asuntos públicos (suma de las tres primeras opciones recogidas en el gráfico 1). Sin embargo, sólo ejercita ese derecho en torno al 20% (menos del 10% lo hizo durante el último año). A partir de la información disponible en las encuestas del CIS pueden comentarse brevemente las diversas modalidades de participación directa:

- Firmar una petición o una protesta: es el tipo de intervención más ejercida en el último año (22%), y la que más personas estarían dispuestas a realizar (80%).

⁴ Estas tres formas de intercambio social han sido teorizadas por Enzo Mingione (*Las sociedades fragmentadas. Una sociología de la vida económica más allá del paradigma del mercado*, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1994) a partir de Karl Polanyi (*La gran transformación. Crítica del liberalismo económico*, La Piqueta, Madrid, 1989).

Gráfico 1
Participación directa en diversas formas de intervención social o política



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta del CIS N° 2.606 (2005, pregunta 19); los datos de participación en huelgas proceden de la Encuesta N° 2.633 (2006, pregunta 16); los de "abordar problemas locales con otras personas" de la Encuesta N° 2.572 (2004, pregunta 8, no incluye otras opciones); y los de "bloquear el tráfico" y "ocupar edificios", de la Encuesta N° 2.218 (1996, pregunta 68). Los huecos a la derecha de cada barra, hasta sumar 100, corresponden a las respuestas NS/NC (No sabe/No contesta).

- Acudir a una manifestación: la tasa de participación en manifestaciones varía mucho de unos años a otros, oscilando entre el 30% de 1996 (Estudio CIS N° 2.154) y el 13% de 2002 (Estudio CIS N° 2.450). En enero de 2005, el 29% afirmaba haber participado en manifestaciones durante el año anterior (Estudio CIS N° 2.588), proporción que bajó al 18% en mayo de ese mismo año (Estudio CIS N° 2.606). Al margen del grado de consistencia de estas cifras,⁵ queda claro que la mayoría de los ciudadanos (en torno al 75%) considera que la manifestación pública es una forma de participación que está dispuesta a realizar cuando lo considere conveniente.
- Boicotear o comprar productos por razones políticas, éticas o para favorecer el medio ambiente: en el último año afirma haberlo realizado el 14% de la población mayor de

⁵ No se ha podido construir una serie con el porcentaje de participación en manifestaciones porque las preguntas de los diversos cuestionarios no son coincidentes. En unos casos se pregunta si se ha manifestado "durante el último año", en otros "en los últimos cinco años" y en otros "alguna vez".

15 años; dos de cada tres personas consideran que es un medio legítimo de presión que estarían dispuestas a secundar en algún momento.

- Entregar dinero o recaudar fondos para una actividad social o política: lo ha hecho en el último año otro 14% de ciudadanos, y se muestran favorables a llevarlo a cabo en el futuro dos tercios de la población adulta.

De las personas inscritas en clubes, asociaciones y otro tipo de organizaciones, la mayoría participa como usuaria o receptora de servicios, y sólo un tercio coopera activamente en su gestión y tareas

- Colaborar con otras personas del pueblo o barrio para resolver problemas de la localidad: un 11% de la población afirma haber ejercido esta forma de participación en 2004, una proporción similar a la detectada en 1997 (12%). En este caso no se preguntó por la disponibilidad para realizar esta práctica en el futuro en caso necesario.
- Asistir a un mitin político: en 2005 sólo lo hizo un 7%, mientras que un año antes (coincidiendo con las elecciones generales de 2004) lo señalaba el 12%.
- Contactar o intentar contactar con un político para expresarle sus opiniones: en el último año lo ha hecho el 5% de la población adulta, y otro 6% en años anteriores. El 42% lo haría si lo viese conveniente, mientras que el restante 46% afirma que nunca recurriría a un político. Otra encuesta realizada en 2004 obtuvo resultados muy similares.
- Participar en una huelga: el 5% de las personas de 16 y más años afirmaba en 2006 haber acudido a una huelga durante el último año, mientras que el 30% lo hizo en años anteriores. Tomando como referencia no el total de los adultos sino sólo a la población activa, estas cifras se elevan al 8% y 51%. Estos datos pueden compararse con los de otra encuesta realizada doce años antes, en 1994, según la cual había participado en una huelga el 37% de los activos. De estos, además, el 41% había acudido “bastantes” o “muchas veces” a la huelga, y casi la mitad estaba dispuesto a participar “aunque no tuviera el apoyo de los sindicatos”.
- Contactar o comparecer ante los medios de comunicación para expresar sus opiniones: sólo ha intervenido de este modo el 6% de la población (el 2% en el último año), si bien la mitad lo haría en el futuro si le pareciera oportuno.
- Participar en un forum o grupo de discusión política en Internet: aunque son muy pocos los que han utilizado esta vía de participación en 2005 (algo menos del 5% de la población adulta), la proporción de quienes consideran que la podrían explotar en el futuro (37%) había subido siete puntos en relación al año anterior (Estudio CIS N° 2.575), lo que sugiere que puede convertirse en una forma de intervención en auge.
- Bloquear el tráfico: esta vía de intervención social había sido utilizada alguna vez por el 10% de la población, según una encuesta del CIS de 1996. El 26% estaría dispuesto a hacerlo en el futuro y el 39% no lo haría nunca.

- Ocupar edificios o fábricas: según la fuente anterior, tenía esta experiencia el 2,7% de la población adulta, mientras que el 18% no tendría dificultad en hacerlo como forma de protesta política, por ejemplo contra la especulación o la carestía de la vivienda. Sin embargo, el 71% de la población nunca recurriría a este método (el 8% restante no tenía opinión al respecto).

Redes de participación formales e informales

Otra vía de participación ciudadana en los asuntos públicos consiste en formar parte de redes sociales y asociativas que permiten crear lazos más allá de la familia, los amigos y el puesto de trabajo. Estas redes sociales pueden tener fines diversos (culturales, políticos, deportivos, religiosos, profesionales, etc.) y adoptar un carácter formalizado, como una ONG o un sindicato, o más bien informal, como un grupo de tertulia o una peña de jóvenes en las fiestas de los pueblos. Además, el grado de participación puede ser muy variado, incluyendo a aquellos que dedican muchas horas a la entidad en la que están inscritos pero no participan de sus actividades o lo hacen ocasionalmente. Ello explica también que las estimaciones sobre la proporción de personas asociadas en España varíen de forma notable de unos sondeos a otros.

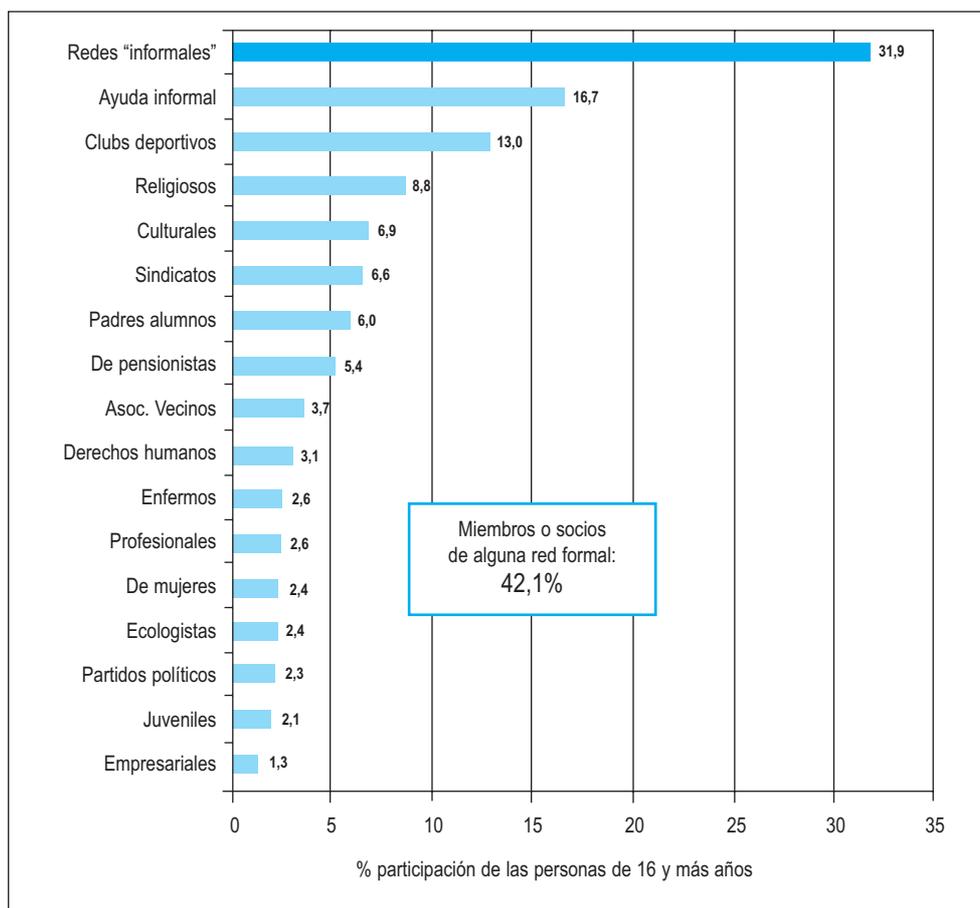
Para describir la participación en redes asociativas, el punto de referencia es la encuesta del CIS sobre *Ciudadanía, participación y democracia* de marzo-abril de 2002, que proporciona una información desagregada sobre las redes asociativas⁶ (ver gráfico 2), aunque lamentablemente no coincide con las aplicadas en otros años. Este estudio permite conocer muchos aspectos relacionados con el asociacionismo formal e informal en España. En primer lugar, las personas pertenecientes a asociaciones formales de cualquier tipo constituyen el 42%, si bien sólo el 31,6% ha participado en alguna de sus actividades en el último año y únicamente el 16,3% ha realizado trabajos voluntarios para dichas asociaciones. Es decir, que de las personas inscritas en clubes, asociaciones y otro tipo de organizaciones, la mayoría participa como usuaria o receptora de servicios, y sólo un tercio coopera activamente en la gestión y tareas de la entidad.

Entre las redes informales de participación se distinguen dos tipos principales: los grupos que se reúnen habitualmente porque “comparten algunos intereses”, sobre todo en el campo cultural y del entretenimiento (tertulias, peñas, etc.), donde se encuadra el 31,9% de las personas de 16 y más años; y la “ayuda brindada voluntariamente” a ancianos y enfermos que no son parientes al margen de asociaciones formales (16,7%).⁷

⁶ Estudio CIS N° 2.450. Se han agrupado las siguientes categorías: organizaciones ecologistas y protectoras de animales (ecologistas); pacifistas, de derechos humanos y cooperación (derechos humanos); de enfermos y discapacitados (enfermos); sindicatos y organizaciones agrarias (sindicatos); y organizaciones de caridad o ayuda social y religiosas (religiosas). Es posible que se produzcan solapamientos cuando las mismas personas pertenecen a varias categorías agrupadas.

⁷ Encuesta CIS N° 2.450 (2002).

Gráfico 2
Participación en asociaciones y redes sociales (2002)



Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta del CIS N° 2.450 (2002, pregunta 15).

Según el *Panel de hogares de la Unión Europea*, realizado entre 1996 y 2001, la proporción de personas que pertenecía a alguna asociación en España se mantuvo casi sin variaciones en dichos años (25% y 26%, respectivamente). Las mayores tasas de asociacionismo se registran entre las personas de edades intermedias (más que entre jóvenes y personas mayores), con renta familiar alta (el 30% frente al 20% entre población de rentas bajas) y con estudios universitarios (doble proporción que quienes no superaban el nivel de la enseñanza primaria).⁸

⁸ Instituto Nacional de Estadística (INE), *Panel de hogares de la Unión Europea*, en www.ine.es/inebase

En el contexto internacional, una encuesta promovida en 2003 por la Fundación Europea de la Ciencia caracterizaba a España como un caso paradójico en materia de asociacionismo: era el país donde la población asignaba más importancia a “participar activamente en asociaciones voluntarias”, pero, en la práctica, registraba uno de los porcentajes más bajos de participación. “Más allá de estas situaciones contradictorias, cabe destacar que son los ciudadanos de los países del norte de Europa los que sistemáticamente muestran mayores niveles de colaboración y participación en asociaciones voluntarias, mientras que son los sureuropeos y los ciudadanos de algunos países ex comunistas los que menos se comprometen con este tipo de organizaciones”.⁹

Afiliación sindical y política

Según las encuestas del CIS, que proporcionan esta información de manera coherente a lo largo de muchos años, la tasa de afiliación a partidos se sitúa siempre entre el 2,3% y el 3,5% de la población adulta, y la afiliación sindical entre el 9% y el 15,5% de la población activa.¹⁰ Se trata de tasas bajas si se tiene en cuenta que los partidos políticos y los sindicatos son los principales vehículos de participación directa de los ciudadanos y de los trabajadores en las esferas política y sindical.

Se dedica
100 veces
menos
tiempo a la
participación
social
que a ver la
televisión

Tiempo dedicado a la participación social

Si se suman los cuatro tipos de redes sociales (asociaciones formales, grupos informales, ayuda individual a personas de otros hogares y ayuda a personas necesitadas de la propia familia), el tiempo medio dedicado en el último mes al conjunto de las redes es de 12 horas por persona (tres horas a la semana) según la citada encuesta del CIS.¹¹ Sin embargo, en este cómputo se incluye la cooperación informal con personas de la propia familia, que se descartaba en la definición de participación ciudadana en asuntos públicos, lo que puede inflar artificialmente el promedio de horas dedicadas. A través de la *Encuesta de empleo del tiempo*, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) también en 2002, se extrae lo siguiente:

⁹ Mariano Torcal y Laura Morales, *Los españoles en Europa: actitudes, orientaciones y comportamientos. Avance de resultados de la Encuesta Social Europea*, 2003, p. 9. En www.ess-spain.upf.edu

¹⁰ Los dos sindicatos más grandes del país, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), cuentan con 1,5 millones de afiliados, de los cuales el 32% son mujeres.

¹¹ Estudio CIS N° 2.450 (2002).

- Ayuda informal a otros hogares: ayudas realizadas directamente por la persona encuestada a otros hogares, sin mediar ninguna organización. Suponen algo más de seis horas mensuales en el caso de las mujeres y tres horas y cuarto en el de los hombres.
- Actividades participativas: asistir a reuniones u otras actividades de organizaciones sociales, políticas, religiosas, juveniles, deportivas, etc., cuando el que acude no forma parte de dichas organizaciones; la encuesta del INE también incluye aquí otras actividades tan diversas como votar, ser testigo en un juicio o formar parte de un jurado popular. Estas prácticas suponen un promedio de dos horas y media al mes para las mujeres y una hora y 40 minutos para los hombres.
- Trabajo voluntario al servicio de una organización: participación no remunerada, o con unos honorarios mínimos, en las actividades y servicios de una asociación o entidad formal, ya sea como miembro de la misma o como colaborador voluntario. El promedio de tiempo que la población española dedica a esta actividad es menos de media hora al mes (algo más entre los hombres que entre las mujeres). Si este tiempo se distribuye sólo entre las personas que según la encuesta del CIS del mismo año participan activamente en las organizaciones o redes formales (16% de las personas adultas), la media de tiempo dedicada sería aproximadamente de tres horas al mes (45 minutos a la semana).

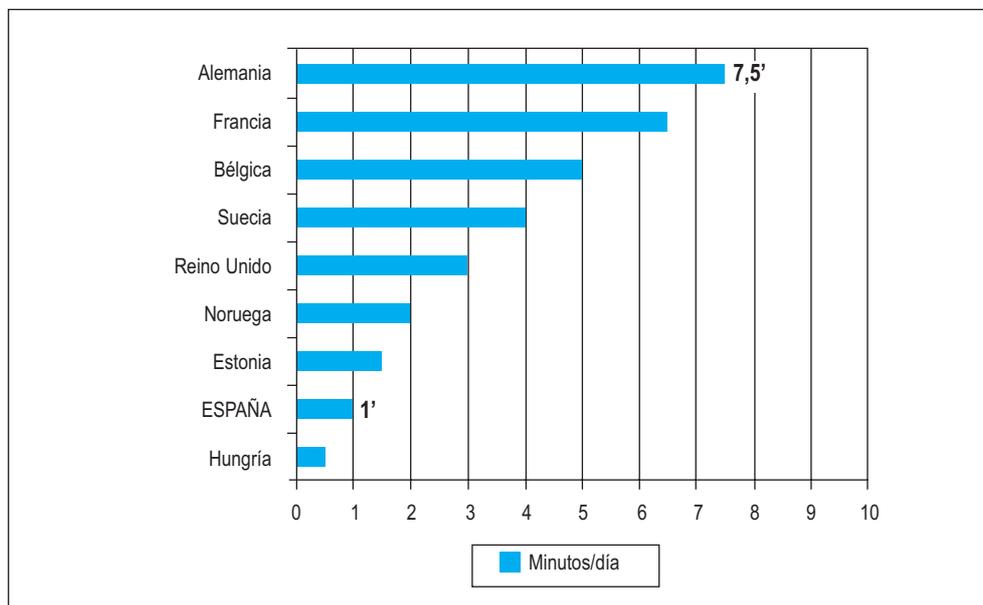
La primera de estas tres actividades (ayuda informal a otros hogares) entraría propiamente en el ámbito de la reciprocidad, que no ha sido incluido en el concepto de participación ciudadana. Las actividades participativas se caracterizan por el escaso protagonismo de las personas que intervienen (por ejemplo, cumplir con un rito religioso o acudir a una reunión convocada en el colegio de los hijos, etc.). La tercera actividad (trabajo voluntario en cualquiera de las organizaciones descritas anteriormente) es la que tiene un componente mayor de protagonismo social y político, pues implica desarrollar un papel activo en las organizaciones de las que se forma parte, ya sea en la gestión o en las actividades propias de la entidad. Esta práctica es a la que menos tiempo le dedica como promedio mensual (media hora escasa, o sea, un minuto diario) el conjunto de la población española. Hay que recordar que en el mismo periodo de tiempo se dedican, según la citada encuesta, un promedio de 89 horas a tareas domésticas, 80 horas a trabajo remunerado, 59 horas a ver televisión y 45 horas a relaciones de ocio y amistad.

Eurostat está coordinando la aplicación en toda Europa de la *Encuesta de empleo del tiempo* y, a través de ella, se sabe que España es uno de los países donde menos horas se destinan al “trabajo voluntario al servicio de una organización”.¹² Mientras en Alemania o Francia se emplean más de seis minutos diarios a ese tipo de actividad (tres horas al mes), en España sólo se dedica un minuto diario (media hora al mes) (ver gráfico 3). En la

¹² Eurostat, *How Europeans spend their time everyday life of women and men. Data 1998-2002*, Comunidades Europeas, Luxemburgo, 2004.

medida en que este tiempo se concentra en los miembros activos de las organizaciones (16% de la población adulta, según los cálculos efectuados antes), la media por persona es bastante mayor, pero todavía queda muy lejos de las 59 horas mensuales empleadas en ver televisión.

Gráfico 3
Tiempo diario dedicado a trabajo voluntario a través de organizaciones en España y otros países de la Unión Europea



Fuente: elaboración propia a partir de la *Encuesta de empleo del tiempo* aplicada por Eurostat en 2002.

El tiempo destinado por la ciudadanía a participar activamente en los asuntos públicos (ya se trate de intervenciones puntuales o mediante la cooperación en organizaciones) es muy pequeño en relación al que se dedica a otras formas de intercambio social, lo que refleja la debilidad de los ciudadanos y ciudadanas en cuanto sujetos políticos capaces de intervenir activamente en los asuntos públicos que les afectan. Las personas dedican muchísimo más tiempo a las relaciones familiares y mercantiles, y un tiempo todavía apreciable –aunque cada vez menor– a las relaciones de reciprocidad con personas que no son parientes ni compañeros de trabajo (lazos y prácticas de amistad, buena vecindad y cooperación con los próximos).

Así, se puede concluir que el Estado y los partidos políticos han acaparado la gestión de lo político, dando lugar a formas de ciudadanía de baja intensidad que han provocado el

desencanto político de muchos ciudadanos, o bien la búsqueda de vías alternativas de participación por parte de sectores minoritarios.¹³

Escasa confianza en las instituciones de participación indirecta

Para valorar la actitud de la población ante las instituciones políticas de participación indirecta, a través de representantes, se han escogido dos: los partidos políticos y el Congreso de los Diputados. El gráfico 4 recoge el grado de rechazo que se expresa hacia estas instituciones en el periodo 1994-2005. Las mayores críticas, que además aumentan a lo largo de los años, son para el funcionamiento de los partidos, aunque las oscilaciones son similares en ambos casos: el punto de partida (1994) es el de mayor crispación y rechazo de estas instituciones, y coincide con la fase final de un desgastado Gobierno socialista, acusado por los escándalos del GAL y de personajes como Juan Guerra o Luis Roldán, además de la influencia de una fuerte recesión económica que incrementó el paro en más de un millón de personas.

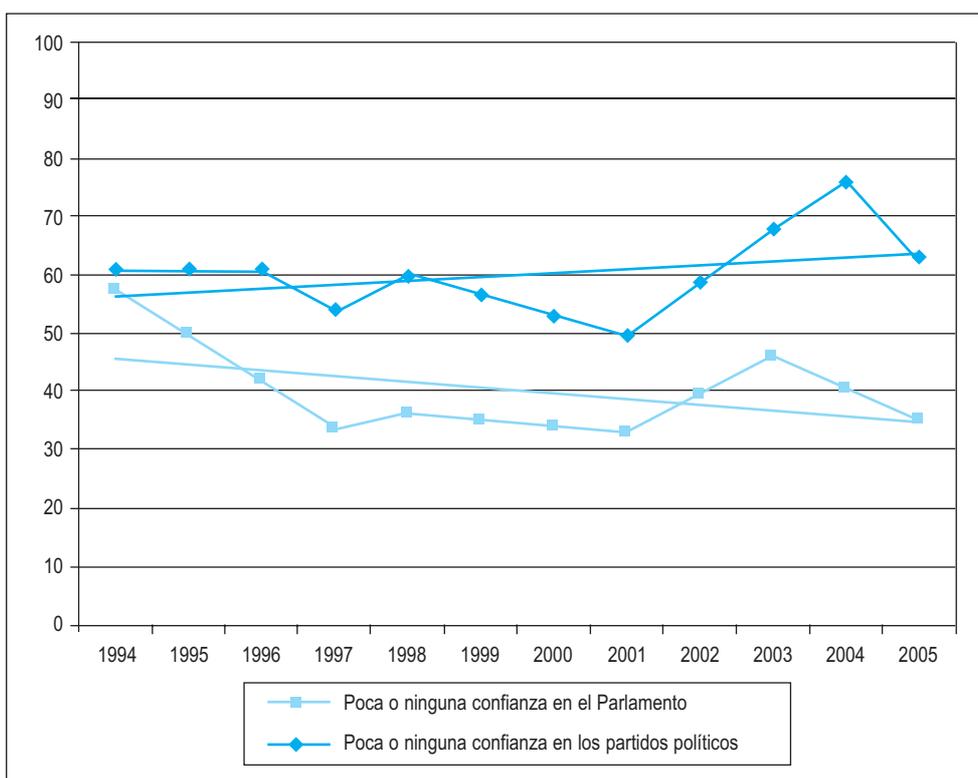
El Estado y los partidos políticos han acaparado la gestión de lo político, dando lugar a formas de ciudadanía de baja intensidad que han provocado el desencanto político de muchos ciudadanos

Con la llegada al poder del Partido Popular en 1996 se inicia un ciclo relativamente largo de estabilización hasta los años 2002-2003, momento en que el descontento vuelve a crecer coincidiendo con la mini crisis económica de 2002 (año en que la sombra del paro volvió a hacerse presente) y con la implicación en la impopular guerra en Irak, que dio lugar en febrero a algunas de las mayores manifestaciones de la historia de España.

Por último, en 2004 ambos indicadores evolucionan por primera vez en dirección opuesta: mientras se recupera la confianza en la democracia y en el Parlamento, crece la desconfianza hacia los partidos políticos como consecuencia de la dura confrontación electoral tras el 11-M, cuando socialistas y populares se acusaron mutuamente de manipular a la opinión pública.

¹³ Nuevos movimientos sociales que en algunos casos tratan de promover un nuevo concepto de ciudadanía universal, ligado a la defensa de los derechos políticos y sociales en todo el mundo, y que cuestionan las fórmulas tradicionales de oligarquización política y económica. Ver Boaventura de Souza Santos, *El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política*, Trotta, Madrid, 2005; Ángel Calle, *Nuevos movimientos globales. Hacia la radicalidad democrática*, Ed. Popular, Madrid, 2005; y Ramón Fernández Durán, Miren Etxearreta y Manuel Sáez, *Globalización capitalista. Luchas y resistencias*, Virus, Barcelona, 2001.

Gráfico 4
Desconfianza e insatisfacción con el funcionamiento de la democracia,
el Parlamento y los partidos políticos (1994-2005)



Fuente: elaboración propia a partir de los Estudios del CIS NN. 2.088, 2.124, 2.218, 2.270, 2.312, 2.417, 2.540 y 2.620.

La insatisfacción de gran parte de la sociedad española ante las instituciones políticas es un reflejo de su ambivalencia ante la situación del país; se afirma la democracia pero se considera que necesita cambios: algunos (50%), muchos (24%) o un cambio total (11%). Tan sólo el 8% cree que el sistema democrático funciona bien y no necesita ningún cambio.¹⁴ En especial, la crítica se dirige a la desigualdad en el reparto de la renta y la riqueza,¹⁵ que hace de España una sociedad “injusta” o “muy injusta”, en opinión de la inmensa

¹⁴ Estudio del CIS N° 2.206, pregunta 15.

¹⁵ Según la *Encuesta Financiera* aplicada por el Banco de España en 2002, “la renta media del 10% de los hogares con mayores ingresos es tres veces la del 50% de hogares con menores rentas, mientras que el patrimonio medio del 10% de hogares más ricos es dieciséis veces el del 50% de hogares con menos riqueza”, es decir, la desigualdad de la distribución de la riqueza es cinco veces mayor que la de la distribución de la renta. Ver Banco de España, *Encuesta Financiera de las Familias (EFF), descripción, métodos y resultados preliminares*, Boletín Económico 11/2004, pp. 66-68.

mayoría de la población (en torno al 80%) según los sondeos del CIS.¹⁶ Se trata de una cuestión básica, que pone en entredicho el sistema democrático vigente en la medida en que no ha sido capaz de reducir las desigualdades sociales.

Crítica a los partidos políticos

La crítica a los partidos políticos es una constante en las encuestas realizadas en España a lo largo de las últimas décadas: sistemáticamente es la institución social peor valorada. Si bien un tercio de los españoles cree que “podemos confiar en que los gobernantes actúan de forma adecuada la mayor parte de las veces”, la mayoría considera que “esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales” por encima de los intereses de los ciudadanos.¹⁷ Para la opinión pública, la mayoría de los candidatos a diputado tiene como principal motivo para presentarse “el poder y la influencia que se obtiene a través del cargo” y,¹⁸ una vez que lo consigue, se deja influir más por los líderes de su partido, por los medios de comunicación y por los grupos de presión que por la opinión pública en general o por los electores que le votaron.

La encuesta del CIS sobre *Representación y participación política* (2005) ofrece una radiografía actualizada sobre los partidos políticos y plantea un conjunto de propuestas y alternativas para mejorar el funcionamiento de la democracia en un sentido participativo. Éstos son los puntos más significativos:

- De once instituciones sociales sobre las que se pide el grado de confianza que depositan en ellas las personas encuestadas, en una escala de 0 a 10, los partidos políticos aparecen en última posición (3,9 de media).
- La mayoría de la población opina que “en los partidos hay demasiada unanimidad y muy poco debate interno. Los miembros y los cargos de los partidos son demasiado dóciles respecto de sus líderes y carecen de opiniones propias”.
- Se piensa que las formaciones defienden sobre todo “los intereses de su partido, por encima del interés “por resolver los problemas del país”.
- Pese a lo anterior, el 73% opina que “sin partidos políticos no puede haber democracia”, lo que no impide plantear al 85% que hay que “crear nuevos mecanismos para que los ciu-

¹⁶ Estudios del CIS Nº 2.270 (1997), pregunta 20, y Nº 2.417 (2001), pregunta 11.

¹⁷ Estudio CIS Nº 2.401, pregunta 24.

¹⁸ Estudios del CIS Nº 2.240 (1997), pregunta 15, y Nº 2.588 (2005), pregunta 24. Con una diferencia de ocho años, la misma proporción de personas encuestadas (56,7%) considera que ése es el primer motivo para presentarse a diputado; en segundo lugar aparece también en ambos años “la posibilidad de luchar por sus ideales y los de su partido”, con un 18% de las respuestas.

- dadanos puedan participar en las decisiones políticas”. Y ello porque, en opinión del 66%, “los partidos ofrecen pocas instancias de participación”.
- El 66% cree que se deberían “modificar algunos aspectos del sistema electoral para permitir que la población pueda votar más por los candidatos y menos por los partidos”.
 - El 73% considera que se debe “consultar más a la población con referéndum”.

La crítica se dirige a la desigualdad en el reparto de la renta y la riqueza, que hace de España una sociedad “injusta” en opinión de la inmensa mayoría de la población

Tras señalar varias fórmulas de intervención directa de la ciudadanía en los asuntos públicos (consejos y jurados ciudadanos, foros de debate/discusión, presupuestos participativos y planes comunitarios), los encuestados consideran que una mayor participación ciudadana en las decisiones políticas permitiría “recoger mejor las opiniones de los ciudadanos” (43% como primera o segunda opción), “controlar mejor los asuntos públicos por parte de los ciudadanos” (36%) y “generar un mayor consenso en torno a las decisiones políticas” (28%).

Los poderes económico y mediático

Desde 1996 hasta 2005 los Latinobarómetros del CIS plantean la misma pregunta sobre “quién tiene más poder en España” (hasta tres respuestas posibles). Los resultados indican que las cuatro instituciones con mayor poder serían el Gobierno, las grandes empresas, la banca y los medios de comunicación. Ante la opinión pública, el poder de la banca habría perdido posiciones en los últimos diez años, y también el del Gobierno, mientras que las grandes empresas y los medios de comunicación cada vez tendrían más influencia. Les siguen los partidos políticos, con tendencia ascendente en los últimos años, si bien muy lejos del poder del Gobierno. Al final se sitúan, con tendencia descendente, el Congreso de los Diputados, que se supone representa la soberanía del pueblo español, y los sindicatos, órganos de representación de los trabajadores.

El hecho de que, aparte del Gobierno central, el poder en España aparezca encabezado por las grandes empresas y la banca, quedando en último lugar el Parlamento y los sindicatos, indica que la población percibe una sociedad donde los poderes económicos y sus intereses se superponen a los de las mayorías sociales. Los partidos políticos y el Gobierno se situarían en una posición puente en la que primarían más sus propios intereses corporativos y de los poderes fácticos (económicos y mediáticos) que su función de representantes y defensores de la población que los ha elegido.

A modo de reflexión

El régimen democrático establecido en España en las últimas décadas ofrece un marco institucional ambivalente para la participación ciudadana: por un lado, se afirma el derecho a la participación y se establecen algunos cauces concretos que antes no existían; por otro, la continuidad de las estructuras socioeconómicas y el énfasis en la delegación (mecanismos de representación) imponen unos límites a la participación directa de los ciudadanos.

La escasa participación directa en los asuntos públicos contrasta con la opinión mayoritaria de que “es necesario introducir mecanismos para que los ciudadanos participen más directamente en las decisiones políticas” (68,4%).¹⁹ Existe una paradoja que ha sido frecuentemente interpretada como “cinismo político” de los españoles:²⁰ por una parte, los ciudadanos afirman los principios democráticos aunque sin implicarse personalmente en ellos y adoptando, más bien, una actitud pasiva y dependiente, con escasa capacidad de intervención social; por otra, legitiman con su voto a los representantes políticos, al acudir masivamente a las urnas cada cuatro años, pero luego desconfían de ellos y les acusan de “violiar en la práctica los motivos morales y los valores éticos”.²¹ Del mismo modo, se acusa a los políticos profesionales de acaparar las decisiones políticas y se exigen más cauces de participación directa, si bien la mayoría reconoce que tiene poco interés por la política y ni siquiera es tema de conversación habitual con amigos o familiares.

Otra línea interpretativa trata de explicar la paradoja no como una característica psicosocial de los españoles, sino como una consecuencia de los procesos históricos concretos que han condicionado la institucionalización de la democracia en España, en especial la estructuración de las actividades económicas –actualmente bajo la égida del capitalismo global– y la prevalencia en el campo de los discursos sociales de la ideología neoliberal.

En primer lugar, las estructuras económicas dominantes en la actualidad a nivel mundial –y también en España– configuran profundas divisiones entre los colectivos humanos generando desigualdades y procesos de inclusión/exclusión en los más diversos ámbitos de la vida social: entre capital y fuerza de trabajo; entre élites dirigentes y masas sociales fragmentadas; entre países del centro y de la periferia, etc. Una “clase gerencial transnacional”²² es la encargada de dirigir un colosal proceso de concentración de poder que abarca no sólo

¹⁹ Estudio del CIS Nº 2.588 (2002), pregunta 6.

²⁰ Ver Raquel Sanz, *El cinismo político de la ciudadanía española: una propuesta analítica para su estudio*, CIS, Madrid, 2002.

²¹ José María Maravall, *La política de la transición*, Taurus, Madrid, 1981. Este autor fue uno de los primeros investigadores en acuñar el término de “cinismo político” al analizar los primeros pasos de la democracia parlamentaria en España.

²² Concepto introducido por Robert W. Cox en los años ochenta, que explicaba así: “En la cima de una estructura de clases global emergente se encuentra la *clase gerencial transnacional*, con su propia ideología, estrategia e instituciones de acción colectiva. (...) Sus puntos focales de organización, la Comisión Trilateral, el Banco Mundial, el Fondo Monetario

el dominio de los mercados financieros mundiales y el monopolio tecnológico, sino también, cada vez más, el acceso a los recursos naturales, el control de los medios de comunicación y el monopolio de las armas de destrucción masiva. En todos estos aspectos se produce un ensamblaje de intereses o complicidad estratégica entre determinados grupos corporativos privados,²³ los organismos económicos internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etc.) y los gobiernos de los grandes Estados.

En segundo lugar, el nuevo discurso hegemónico de la modernización neoliberal es unidimensional en lo macro y pluridimensional en lo micro, apela a la igualdad de oportunidades frente a la "inevitable" desigualdad y reivindica la capacitación de cada cual a la hora de resolver sus problemas (en este sentido es neoliberal). Se acepta que existen factores económicos y políticos condicionantes, pero el marco socioinstitucional se presenta como unidimensional e inevitable. La génesis de la problemática social se considera una cuestión básicamente individual, producida por desajustes de la persona en el sistema; desajustes que deben resolverse a través de los recursos del propio sistema social (en este sentido es profesionalista).²⁴

Internacional y la OCDE, constituyen tanto un marco de pensamiento como una guía de acción para las políticas". Robert W. Cox, "Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales", en Abelardo Morales (comp.), *Poder y orden mundial*, FLACSO, San José de Costa Rica, 1993, pp. 172-73.

²³ Entre ellos, la Cámara Internacional de Comercio (CIC), el Consejo de Estados Unidos para el Comercio Internacional (USCIB), el Diálogo Transatlántico para los Negocios (TBD), la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT), la Patronal Europea UNICE, etc.

²⁴ Esta línea interpretativa ha sido desarrollada, entre otros, por algunos sociólogos críticos de la llamada escuela cualitativa madrileña a partir de Jesús Ibáñez y Alfonso Ortí. Ver Jesús Ibáñez, "Límites de la democracia formal: a favor de la subversión" y "Construyendo la mayoría dominante: la transición como conversión", en *A contracorriente*, Fundamentos, Madrid, 1997, Primera y Segunda parte, pp. 37-212; y Alfonso Ortí, "Transición postfranquista a la monarquía parlamentaria y relaciones de clase: del desencanto programado a la socialtecnocracia transnacional", en *Política y Sociedad*, otoño de 1988, Nº 2.